

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 27º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-7812-2021
CARATULADO : RAMOS/FISCO DE CHILE CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, trece de Septiembre de dos mil veintitrés

VISTOS:

En causa digital **Rol C-7812-2021**, por presentación de fecha 20 de septiembre de 2021, comparecen don Cristian Cruz Rivera y Luis Pérez Camousseight, ambos abogados, domiciliados en Pasaje Dr. Sótero del Río N° 326, oficina N° 707, comuna de Santiago, y en representación judicial de doña **GABRIELA FERNANDA RAMOS BARRAZA**, abogada, domiciliada en Pasaje Las Ligustrinas Nro. 9.795, comuna de San Ramón, deducen **demanda en procedimiento ordinario de mayor cuantía de indemnización de perjuicios (Juicio de Hacienda)** en contra del **FISCO DE CHILE**, representado -en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos domiciliados en Santiago, Agustinas 1225, Piso 4º, comuna de Santiago, a objeto que, en razón a los antecedentes de hecho y derecho que esgrime, sea acogida en todas sus partes, y en definitiva, se declare que el demandado debe pagar a la actora a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por la desaparición forzada de su padre don Osvaldo Del Carmen Ramos Rivera, la suma de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos), más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que se estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

En folio 6, consta que con fecha 17 de diciembre de 2021, se **notificó** personalmente a don Juan Antonio Peribonio Poduje, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, de la acción deducida en su contra.

En folio 7, se presenta doña Ruth Israel López, Abogado, Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado por el Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, quien **contestando la demanda** deducida en su contra, solicita el rechazo de la demanda entablada en su contra, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que expone, oponiendo, en primer lugar, la excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizada y reparada integralmente la demandante; en segundo lugar, opone la excepción de prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil y en **subsidio**, en caso que el tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del



Código Civil; y **en subsidio de las defensas y excepciones precedentes**, opone las alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos, refiriéndose a la fijación de la indemnización por daño moral y luego a la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada. **En subsidio**, de lo anterior, solicita rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

En folio 11, la demandante evacúa el trámite de **Réplica**.

En folio 15, la demandada evacúa el trámite de **Dúplica**.

En folio 17, se **recibió la causa a prueba**, fijándose al efecto los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y rindiéndose por las partes la prueba documental que obra en autos.

En folio 33, **se citó a las partes a oír sentencia**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, en estos autos han comparecido don Cristian Cruz Rivera y Luis Pérez Camousseight, ambos abogados en representación de doña Gabriela Fernanda Ramos Barraza, e interponen demanda en procedimiento ordinario de mayor cuantía de indemnización de perjuicios (Juicio de Hacienda) en contra del Fisco De Chile, representado -en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado- por don Juan Antonio Peribonio Poduje, a objeto que, en definitiva, sea acogida en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar a la actora a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por la desaparición forzada de su padre, la suma de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos), más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que S.S. estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

Fundan su libelo expresando en cuanto a los **Hechos** que, como se acreditara con los certificados de nacimiento que indica la demandante acompañar, doña **Gabriela Fernanda Ramos Barraza**, es hija de don **Oswaldo Del Carmen Ramos Rivera**, detenido por agentes del Ejército de Chile, en el asalto al Palacio de La Moneda, el 11 de Septiembre de 1973, trasladado malherido hasta las dependencias de la Posta y desaparecido hasta la fecha.

Exponen que según información disponible en página web <https://memoriaviva.com/nuevaweb/detenidosdesaparecidos/desaparecidos/r/ramos-rivera-osvaldo-del-carmen/>: "Oswaldo Ramos Rivera, soltero, 22 años de edad a la ocurrencia de los hechos, militante del Partido Socialista, se encontraba en el Palacio de La Moneda, sede del gobierno, el día 11 de septiembre de 1973. En dicha oportunidad resultó con heridas a bala múltiples y fue hecho prisionero, razón por la cual fue llevado a la Posta Central de la Asistencia Pública, donde permaneció hasta el día 28 de septiembre de 1973, fecha en que fue sacado por efectivos militares que dijeron que lo trasladarían a la Penitenciaría de Santiago, lugar al que nunca llegó, desapareciendo desde entonces. Oswaldo Ramos era un joven mueblista que trabajó en la Corporación de la Vivienda, CORVI, ingresando posteriormente a la Guardia Presidencial del Presidente Allende, GAP. Fue así como el 11 de septiembre de 1973, en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales quedó herido a consecuencias de ráfagas de ametralladoras. La Moneda fue tomada por



efectivos de Infantería y de tanques del Ejército a los que se sumaron más tarde fuerzas de Carabineros. A las 11 de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la Fuerza Aérea de Chile que destruyó gran parte de la sede de Gobierno. Los miembros de la Guardia Presidencial y otras personas permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por la puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda: allí fueron encañonados y golpeados por los militares, quienes les ordenaron tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando permanentemente amenazados, incluso de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar. Otros miembros del GAP que no alcanzaron a entrar en La Moneda y que fueron detenidos en sus proximidades son Gonzalo Jorquera Leyton, Carlos Cruz Zavala, Domingo Blanco Tarrés y Williams Osvaldo Ramírez Barría, entre otros, todos los cuales integraban un grupo de aproximadamente 13 personas, los que en algunos casos fueron ejecutados y los demás permanecen en calidad de detenidos desaparecidos. Los detenidos de La Moneda fueron conducidos en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda. Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar al día siguiente a los 17 detectives que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellas: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, sociólogo y asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, médico y asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra y asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, egresado de medicina y asesor presidencial; Arsenio Poupin Oissel, abogado, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial; y Georges Klein Pipper, médico psiquiatra, asesor de la Subsecretaría General de Gobierno. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca, Héctor Manuel Urrutia y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido en apoyo al Gobierno. Estas personas continúan desaparecidas o fueron ejecutadas. Al ser ocupado ese Palacio por las tropas, Osvaldo Ramos Rivera y Antonio Aguirre Vásquez se encontraban heridos e inmovilizados, fueron hechos prisioneros y enviados inmediatamente a la Posta Central de la Asistencia Pública. Dado que Ramos tenía heridas a bala en el abdomen fue sometido a intervenciones quirúrgicas y a tratamiento, de manera que su situación de salud evolucionó favorablemente. Un hermano del afectado, al ser informado que Osvaldo estaba herido en la Posta Central se presentó en dicho lugar, allí observó una lista con los nombres de los heridos ingresados a la



Posta, en ella figuraba su hermano. Esta información le fue confirmada por personal de dicho centro asistencial pero le dijeron que no era posible verlo. Le indicaron que podía consultar diariamente por teléfono sobre el estado del herido. Así lo hicieron los familiares del afectado, recibiendo noticias diarias respecto de su estado, hasta que el 28 de septiembre se les comunicó que necesitaban dadores de sangre. Con el objeto de hacer esta donación, algunos miembros de la familia fueron a la Posta y allí se les informó que Osvaldo Ramos había sido sacado de la Posta por efectivos Militares, quienes señalaron que era enviado a la Penitenciaría de Santiago. De inmediato los familiares fueron a la Penitenciaría de Santiago donde negaron la llegada del detenido, estas consultas se repitieron los días siguientes con los mismos resultados. El diario El Mercurio, de fecha 15 de septiembre de 1973, publicó una crónica titulada "Personas heridas que fueron llevadas a la Asistencia Pública", allí se presentó la nómina de personas heridas que fueron atendidas en ese establecimiento. Ente ellos figura: "Ramos Rivera, Osvaldo; herida a bala abdominal, complicada. La detención y desaparición de Ramos Rivera ocurrió simultáneamente con la de Antonio Aguirre Vásquez, el otro miembro del GAP que fue hecho prisionero herido en La Moneda y que también desapareció. Todos los esfuerzos realizados para ubicar a Osvaldo Ramos fueron inútiles. Desde que el 28 de septiembre de 1973 fuera sacado de la Posta de la Asistencia Pública, donde era atendido por sus heridas a bala, y se lo llevara una patrulla militar con destino a la Penitenciaría de Santiago, donde nunca llegó, Osvaldo Ramos está desaparecido.

Se refieren luego a las **gestiones judiciales y/o administrativas** indicando que en el primer tiempo del desaparecimiento la familia de Ramos Rivera hizo múltiples gestiones y consultas en la Penitenciaría, Ministerio de Defensa, Fiscalías Militares, etc. Finalmente el 6 de diciembre de 1976, María del Carmen Rivera Torres, madre del afectado, presentó una denuncia por el desaparecimiento y presunta desgracia de Osvaldo Ramos ante el Noveno Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, que se registró como causa rol 17.584-10-E solicitando que se oficie a las instituciones públicas que puedan dar información sobre su hijo: Contraloría General de la República, Servicio de Seguro Social, Ministerio de la Vivienda y a otras instituciones para que puedan informar sobre su posible detención o muerte: Ministerio del Interior, Fiscalías Militares e Instituto Médico Legal. El 10 de diciembre de 1976 el Juez Instructor ordenó que se instruyese sumario y se oficiara al Ministro del Interior y a la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos. Ninguna de estas instituciones respondió a los Oficios del Juzgado. El 27 de enero de 1977 se ofició a la Asistencia Pública para que informe si Osvaldo Ramos fue atendido en ese establecimiento. Las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones consistieron en una entrevista con la madre del afectado, quien ratificó lo declarado al Tribunal y su Parte 344 del 25 de enero finaliza así: "Con los antecedentes proporcionados por la denunciante, el funcionario investigador procedió a realizar diversas consultas a los organismos pertinentes a fin de establecer el paradero de Osvaldo del Carmen Ramos Rivera no obteniendo resultados favorables hasta el momento." El Dr. Emilio Salinas Donoso, Médico Jefe de la Asistencia Pública "Dr. Alejandro del Río" respondió al Tribunal según Boletín de Informaciones



del 16 de mayo de 1977, en el que se certificó que Ramos Rivera, Osvaldo, fue atendido el 11 de septiembre de 1973 a las 16:20 horas y se comprobaron las siguientes lesiones: "Herida a bala tóraco-abdominal complicada, Herida vesícula biliar hígado y colon". El pronóstico es grave y se señala: "Destino del enfermo: Hospital Penitenciario el día 28 de septiembre de 1973." El Alcaide de la Penitenciaría de Santiago, Alfredo Castro Richards envió el oficio 3003 del 26 de agosto de 1977 en el cual señaló que "no se ha registrado el ingreso de dicho reo con fecha 28-9-73 ni anterior, ni posterior a ella: así como tampoco su egreso." El mencionado Alcaide sugirió que se informe directamente a la Dirección del Hospital Penitenciario "ya que se presume que dicho interno pudo haber estado poco tiempo en él". El 27 de septiembre de 1977, la madre de Ramos presentó un escrito acumulando esta causa con la de querrela criminal por el delito de secuestro. Para tomar una decisión, el juez resolvió que para decidir era necesario que la madre de Ramos acreditara legalmente el parentesco. El Hospital de la Fuerza Aérea, el Hospital Militar y el Hospital de Carabineros informaron que el afectado no figuraba en sus registros. El Instituto Médico Legal informó el 23 de noviembre de 1977 que no se le ha practicado autopsia a Osvaldo del Carmen Ramos Rivera y que no aparece registrado en el índice de ingreso de cadáveres. Un nuevo Parte de la Policía de Investigaciones del 10 de agosto de 1978 informó que se realizaron nuevas pesquisas consistentes en interrogar a la madre del afectado y requerir información a hospitales, Carabineros, Instituto Médico legal y recintos de reclusión de la Gendarmería. La investigación no arrojó ningún resultado positivo. El 4 de septiembre de 1978 el Hospital Penitenciario ratificó que no hay ningún registro de atención médica de Osvaldo del Carmen Ramos Rivera, ni hay ficha clínica ni ninguna otra constancia de su estadía en ese establecimiento. Esta información fue reiterada nuevamente el 13 y el 14 de marzo de 1979. El 4 de junio de 1979, casi tres años después de iniciado el proceso y de seis de la ocurrencia de los hechos, el juez Servando Jordán fue designado Ministro en Visita en varios casos de detenidos desaparecidos, y resolvió solicitar a la Asistencia Pública el nombre del funcionario que autorizó la salida del herido y consultó "si hay constancia de los nombres de los funcionarios que actuaron en dicho traslado". También ofició al Ministro del Interior. El Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández Fernández, informó el 14 de junio de 1979 que en los registros que lleva ese Departamento de Estado no existe constancia de la detención de Ramos Rivera. El 20 de junio de 1979 el Médico Jefe de la Asistencia Pública informó que el médico que firmó el alta de Osvaldo Ramos es el Dr. Pedro Gaete Verdugo. Agregando que en el libro de Salida de Ambulancias de la fecha citada no registra traslado a la Penitenciaría y finalmente señala que existe la posibilidad de que el enfermo haya sido retirado por vehículo ajeno. El 20 de junio de 1979 se citó a declarar al Dr. Pedro Gaete Verdugo. El 18 de julio de 1979 declaró el Dr. Gaete quien señaló no recordar a Osvaldo Ramos y que las altas se dan por órdenes superiores que corresponden al Jefe de Turno. Agregó que si un paciente es dado de alta tiene que cumplir un trámite previo en la Oficina de Recaudación y dejar constancia en la oficina de la ambulancia. La única posibilidad de que no haya constancia de la salida de una persona es que se fugue. El Ministro en Visita citó a declarar al Dr. Juan Troncoso Farías, que era



Jefe de Turno en la Asistencia, el que no fue habido y el 16 de octubre de 1979 la Policía de Investigaciones informó que estaba en Ecuador. La Policía de Investigaciones informó el 20 de agosto de 1979 que en el Archivo Confidencial está registrado Osvaldo del Carmen Ramos Rivera, alias Hernán Flores y "El Manque", miembro del GAP y que figura en las listas de presuntos desaparecidos. Se agrega que no hay registro de que haya salido del país. El 18 de octubre de 1979 la Posta de la Asistencia Pública reiteró la información entregada. El 14 de noviembre declaró el Dr. Juan Troncoso que el alta fue firmada por el Dr. Pedro Gaete y se firmó "además un traslado a la Penitenciaría por el Dr. Emilio Salinas, por lo que presumo que debe haber desaparecido en el trayecto, si es que no llegó a la Penitenciaría. También es posible que el tipo se haya fugado en el trayecto, porque el hospital de la Penitenciaría no es para enfermos graves, lo que hace suponer que el hombre no debe haber estado grave." El 11 de diciembre de 1979 el Ministro en Visita Servando Jordán declaró que "se sobresee temporalmente esta causa porque no se encuentra completamente justificada la perpetración de un hecho punible". El 31 de diciembre del mismo año la Corte aprobó el sobreseimiento. El abogado de la parte querellante apeló de la resolución. El 11 de abril de 1980 se solicitó que se revocara la resolución de cierre del sumario y se realicen nuevas diligencias. En mayo de 1981 se alegó la revocación del sobreseimiento temporal pero la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones lo confirmó. La familia realizó numerosas gestiones para ubicar al afectado, todas ellas sin éxito. También presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Los antecedentes antropomórficos de Osvaldo Ramos Rivera fueron anexados a la causa 4449-AF del 22° Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal, en el Patio 29 del Cementerio General, de personas no identificadas muertas entre septiembre y diciembre de 1973. El Juez Instructor de la causa ordenó la excavación de 108 tumbas en septiembre de 1991. De allí se exhumaron 125 cuerpos, los que fueron remitidos al Instituto Médico Legal. En la actualidad (fines de 1992) se está a la espera de los informes periciales de identificación."

Bajo el acápite que denomina "**Reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado**", refieren que el Estado de Chile espontáneamente ha reconocido su responsabilidad en estos hechos en forma expresa a través del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen I, Tomo I, página 118, al constatar dicha comisión, en torno a los hechos acontecidos en el Palacio de La Moneda el día 11 de Septiembre de 1973, lo siguiente: "A las 13:45 horas, al momento de salir este último grupo de personas por la puerta de calle Morandé, entraron por los diferentes accesos del Palacio, las tropas militares compuestas por efectivos de los Regimientos Tacna, Buin y una unidad de reserva. Según la versión de diferentes testigos, el General a cargo de la operación ingresó a La Moneda, subió hasta el Salón Independencia y allí encontró el cuerpo sin vida del Presidente Salvador ALLENDE GOSSENS. A su lado estaba el doctor Patricio Guijón, quien testimonia que, aproximadamente a las 14:00 horas, estando en el último lugar de la fila para hacer abandono del edificio, decidió devolverse con el objeto de sacar una máscara antigases. Al pasar frente al Salón



Independencia y mirar hacia el interior pudo observar al Presidente con un fusil automático en sus manos; en ese momento su cuerpo recibía el impacto de las balas. Con lo expuesto, la Comisión ha debido establecer que el Presidente Salvador Allende se quitó la vida. (...) Desde el interior del Palacio, militares sacaron a dos miembros heridos de la Dispositivo de Seguridad del Presidente y les condujeron hasta la Posta Central. Se trataba de Antonio AGUIRRE VÁSQUEZ, de 29 años y Osvaldo RAMOS RIVERA, 22 años, los dos militantes del Partido Socialista. En ambos casos existe constancia de su permanencia en la Posta Central de Santiago, desde donde fueron sacados por efectivos militares. Desde entonces se desconoce su paradero. Considerando que ambas personas fueron trasladadas desde La Moneda hasta la Posta Central, existiendo constancia de su permanencia allí, y luego retirados por efectivos militares, la Comisión llega a la convicción que Antonio Aguirre y Osvaldo Ramos fueron víctimas de violación a sus derechos humanos, ya que su desaparición es de responsabilidad de agentes del Estado.” Lo anterior es reiterado en el Volumen II, Tomo 3, página 334, del mismo informe, en el que se expresa: “OSVALDO DEL CARMEN RAMOS RIVERA. Detenido Desaparecido. Santiago, La Moneda, septiembre de 1973. Osvaldo Ramos de 22 años de edad, soltero. Trabajaba como ayudante de mueblista, ex funcionario de la Corporación de la Vivienda (Corvi). Militante del Partido Socialista, miembro de la seguridad presidencial (GAP). Fue detenido por efectivos del Ejército cuando salió el último grupo del Palacio de La Moneda el 11 de Septiembre de 1973. Herido en ese lugar fue conducido a la Posta Central, desde donde fue retirado por agentes del Estado. Desde esa fecha se desconoce su paradero”

En el apartado **“Daño producido a la demandante”**, se indica que como consecuencia directa de la desaparición forzada del padre, la actora sufrió un profundo daño moral, que se ha traducido en un perjuicio irreparable de índole subjetivo, acrecentado por el temor a una autoridad militar onnipotente, que no reconoció límites en la moral ni en la justicia, actuando en la forma más bárbara contra quienes ellos estimaban sus adversarios políticos y sus familiares. La pérdida de Osvaldo es algo que aún su hija no puede comprender. La impunidad de todos estos años, unida a la incertidumbre permanente de no saber el destino, que los responsables no entregaran su cuerpo ni información de su suerte y las mentiras oficiales durante años, ha acrecentado su sufrimiento. El daño es obvio. Las Fuerzas Armadas, encargadas de proteger a los ciudadanos chilenos de cualquier agresión foránea, se encargaron de aniquilar a una parte de la población civil. En este caso, dejaron a una familia en la incertidumbre del paradero de uno de sus integrantes, de no saber si estaba vivo o muerto, con la esperanza por años de que algún día apareciera vivo. En los hechos, hasta el presente no se ha podido determinar qué pasó con don Osvaldo Del Carmen Ramos Rivera, desde que fue sacado de la asistencia pública por militares. ¿Dónde fue asesinado? ¿qué hicieron con sus restos mortales? ¿Quién tomó la decisión de hacerlo desaparecer? Su hija debió vivir con las consecuencias de la impunidad todos estos años y hasta hoy carece de información acerca del destino o suerte de su padre, lo que ha significado un dolor que no desaparece, el que se ve agravado por no poder hacer el luto ni tener un lugar



donde enterrar los restos de su padre. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: La privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante para los familiares cercanos". En relación al dolor, sufrimiento y daño moral que la demandante ha experimentado con ocasión de la desaparición de su padre, sus propias palabras indican lo siguiente: **"Relato de doña Gabriela Fernanda Ramos Barraza:** Soy hija de don Osvaldo Ramos Rivera. Actualmente tengo 46 años, desempleada, divorciada, con una relación actual de 6 años, 2 hijas estudiando y una nieta. Mi padre era miembro de la escolta del Presidente Allende. El día 11 de Septiembre de 1973 se presentó a sus labores de escolta en el Palacio de La Moneda a tomar el turno de la mañana. Él realizaba turnos en La Moneda y en la casa de Tomás Moro. Trabajaba, además, con un tío: Enrique Ramos Rivera. Luego de la desaparición de mi padre, a cuya fecha yo tenía poco más de un mes de nacida y aún no había sido reconocida por él, mi madre se quedó viviendo conmigo, de allegados, en la casa de mi padrino (que estaba ubicada en calle Tomás Moro, al frente de la casa del Presidente Allende). Él nos acogió durante algunos meses, para luego irnos a vivir con mi madre a un campamento en la comuna de Las Condes por varios años, hasta que nos entregaron un departamento en la Población La Bandera, comuna de La Granja. Acá, en la Población La Bandera, mi madre inició una nueva relación de pareja y tuvo otros tres hijos. Yo, por mi parte, en tanto iba creciendo, se iban asomando cada vez más dudas en torno al paradero de mi padre y comencé a sufrir mucha angustia, lo pasé terrible. Además, mi padrastro intentó abusar sexualmente de mí en reiteradas ocasiones y me violó en una oportunidad. Yo era muy pequeña, le conté a mi madre y no me creyó. Por supuesto, el responsable, pese a existir una causa penal en su contra, nunca fue sancionado. Es en ese momento que yo volví a vivir con mi padrino (quien a esas alturas vivía y vive aún en Lampa). Con todo lo relatado, ya en mi adolescencia, no pude seguir estudiando y comencé a trabajar como nana, cajera y mil cosas más, para tener dinero para mis necesidades y sobrevivir, sabiendo que era hija de un detenido desaparecido, pero sin tener ningún contacto, hasta la fecha, con la familia de mi padre. Recién cuando tenía treinta años recibí un llamado del hijo de mi padrino, Pablo Acevedo, militante del Partido Socialista, quien me dijo: "encontré a tu familia paterna, a tu tío, hermano de tu padre. Te viene buscando desde hace varios años." Luego de esto, mi tío me contactó, lloramos y nos reencontramos. Era mi familia paterna perdida. Desde ahí, mi vida tuvo más sentido. Se inició una causa de reconocimiento de paternidad, luego de un largo proceso fui reconocida judicialmente como hija de mi padre y me dieron una beca, con la que pude estudiar, terminé el colegio y luego entré a estudiar pedagogía (tres años) y después Derecho. Acabo de jurar el 03 de Octubre del año pasado. He logrado, con mucho esfuerzo, salir adelante. Sin embargo, los militares me quitaron todo. Me quitaron a mi padre, tuve que crecer y sufrir incontables dolores y angustias por no tener un padre que me protegiera, tuve que sufrir la violación y abusos de un padrastro y la negligencia de una madre, por lo que me fui a vivir con mi padrino. Todo por no tener un padre. De modo que mi proyecto de vida, desde mi más tierna infancia, se vio completamente



modificado. No tuve la oportunidad de que mi padre me llevara al colegio de la mano, ni que me celebrara mis cumpleaños, ni pasar con él la Navidad, el Año Nuevo, primer día de clases, graduaciones. Tampoco mi padre pudo estar conmigo cuando nacieron sus nietas, nada de eso. Desde mi mes de nacida lo perdí y se truncó todo. Tengo traumas que vienen desde mi niñez, sufro de terrores nocturnos a causa de lo que me hizo mi padrastro, tengo pavor a la autoridad, tiritó cuando veo en la calle carabineros o militares. Hasta la fecha no sé dónde están los restos de mi padre, qué hicieron con él. Tengo un vacío que jamás se podrá llenar y una pregunta que jamás me podrán responder: ¿dónde está mi padre?. No existen palabras para describir el dolor que aquello me provoca.”

Continúan señalando que, el comentado daño moral no requiere de seguir justificándolo, ya que nuestra propia jurisprudencia ha indicado que “el daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza de la psicología afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre que un hecho afecta a la integridad física o moral de un individuo...” (Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LVIII. Segunda Parte, sección cuarta, pág. 374). En todo caso, el Derecho y la equidad obligan a indemnizar los daños morales sufridos. Por este concepto, pedimos se condene al demandado a pagar una indemnización con la finalidad de reparar el daño psíquico profundo que nuestra mandante ha sufrido y que seguirá sufriendo por la pérdida de su padre en manos de agentes del Estado de Chile.

Estiman que el daño moral sufrido debe ser avaluado en una cantidad no inferior a \$ 300.000.000 (trecientos millones de pesos) para doña Gabriela Fernanda Ramos Barraza, sosteniendo que si bien es cierto que con una indemnización no recuperará a su ser querido, sí es posible evaluar pecuniariamente el daño moral sufrido por la actora por lo que se estima ajustada a derecho y justicia la suma antes indicada.

A continuación se exponen sobre la caracterización del daño en las familias que han sido construidas por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS, Organismo No Gubernamental sin fines de lucro, creado en el año 1985, cuyo objetivo central es otorgar atención médico-psicológica a personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, en especial a sobrevivientes de tortura, así como a familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos y que producto de su vasta experiencia, reconocida a nivel nacional e internacional, ha desarrollado estudios, investigaciones y comunicaciones de los daños psicológicos y psicosociales producidos por la tortura, la desaparición forzada y la impunidad tanto en los individuos como a nivel familiar y social y ha elaborado propuestas de intervención psicoterapéutica, por lo que su opinión acerca de la materia es habitualmente considerada por distintas instituciones e instancias, entre ellas la de los jueces que han investigado las causas de derechos humanos. En consideración a que el CINTRAS, por más de 25 años, ha atendido y acompañado a los familiares de los detenidos desaparecidos, reproducen lo manifestado, respecto del daño moral, social y las secuelas médico-psicológicas sufridas por los familiares de detenidos desaparecidos, ello desde un punto de vista psicoemocional,



caracterización de la familia afectada, dinámica intrafamiliar, reestructuración de la familia y de sus miembros, reestructuración en cuanto al rol, consecuencias de la represión y la impunidad en la salud mental de los familiares de las víctimas de violación del derecho a la vida (en lo individual, en sus vínculos intrafamiliares, en sus vínculos con la sociedad), procesos de duelo y luto.

Concluyen asegurando que el daño moral no necesita seguir justificándose, aunque, de ser necesario, se probarán en la etapa procesal correspondiente los efectos traumáticos personales y concretos que han afectado a la demandante a consecuencias de lo acontecido a su padre, siendo evidente que el padre de la demandante fue afectado en el derecho fundamental y primario a la vida por el Estado, con el consiguiente daño moral para su familia, merece éste, de acuerdo al Derecho y la Equidad, una reparación la que debe implicar el establecimiento de la verdad, la persecución y castigo a los culpables y la indemnización de los daños morales sufridos, solicitando por el último concepto se condene al demandado a pagar una indemnización con la finalidad de reparar el daño psíquico profundo que la actora ha sufrido, sufre y seguirá sufriendo por la pérdida de su padre.

Se remiten luego al **Derecho** señalando que de los hechos delictivos narrados precedentemente, es civilmente responsable el Estado de Chile, ya que a quienes los perpetraron eran miembros del Ejército de Chile, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública. La responsabilidad del Estado por el daño moral que se ha provocado a la actora se encuentra establecida en la Constitución Política de 1925, en la Constitución Política de 1980, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el Derecho Administrativo, en razón del Estado al haber actuado como órgano cometiendo actos ilícitos que causaron daño a las personas. Cita al efecto y reproduce el artículo 6° de la Constitución Política de la República y el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Resumen indicando que es la conducta ilícita, llevada a cabo por agentes del Estado, y los daños provocados por ella la que funda esta demanda civil, elementos todos que hacen procedente que la acción se dirija en contra del Fisco de Chile y desde antes de la vigencia de la actual Constitución, la jurisprudencia y leyes especiales desarrollaron el principio general de que el Estado debe responder por los perjuicios causados a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos.

En el apartado que denomina **el Estado debe responder por los perjuicios causados**, se remiten a antecedentes históricos y doctrina ius publicista. Aporta jurisprudencia.

Luego se pronuncian respecto de la **responsabilidad en el Derecho Constitucional y Administrativo** reproduciendo al efecto los artículo 1 inciso 4, 6 y 38 de la Constitución Política del Estado “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, asimismo, el artículo 4° y 42 de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Agrega que la obligación de indemnizar debe considerarse a la luz del derecho constitucional, y en especial debe considerarse, además, el Bloque de Constitucionalidad, que integra el art. 5°



CPE y las normas de derecho internacional de origen consuetudinario o contractual, vigentes en Chile, que protegen y garantizan los derechos esenciales derivados de la naturaleza humana. Añade doctrina del profesor Humberto Nogueira.

Prosiguen indicando que la acción de derecho público para exigir la responsabilidad del Estado por actos u omisiones por las cuales se ha producido daño a las personas, según la doctrina unánime de los autores iuspublicistas, es imprescriptible. La responsabilidad del Estado es un problema de derecho público y al cual cabe aplicar reglas de derecho público y no las normas del Título xxxv del Código Civil. Se remite a doctrina del profesor Eduardo Soto Kloss expresada en el volumen II de su obra Derecho Administrativo, Bases Fundamentales, el principio de Juridicidad. Refiere jurisprudencia de los tribunales nacionales superiores que han recogido la inaplicabilidad de las reglas del Título XXXV del Libro IV del Código Civil y, por ende, de las reglas en materia de prescripción.

Sintetizan señalando que las normas en materia de prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos no resultan aplicables a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que en nuestro caso también existen las normas de derecho público que rigen la responsabilidad del Estado como son los preceptos citados de la Constitución de 1980 y la Ley 18.575, por lo que la acción que se ejerce en estos autos es imprescriptible. Las disposiciones constitucionales que consagran la responsabilidad del Estado por los daños cometidos en cualquiera de sus actividades tienen una vinculación directa sin ser necesaria la dictación de una norma de inferior rango que disponga su aplicación; es decir, poseen operatividad propia y, obviamente, desde el momento que asumen su carácter de normas constitucionales priman por sobre toda otra disposición. Por esa razón y dada la inexcusabilidad de su función consagrada en la propia Constitución, el juez se encuentra sujeto a la imperatividad de resolver el caso sometido a su conocimiento. En esta función la primera exigencia es someterse a la norma fundamental vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, la cual establecía clara y precisamente la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados por sus órganos.

Enseguida comentan acerca de los **Fundamentos del Derecho Internacional que obligan al Estado a indemnizar**, señalando que los hechos descritos, secuestro, torturas y desaparición del padre dela actora, generadores de la responsabilidad del Estado que se demanda, tienen además el carácter de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, por cuanto el secuestro, las torturas y la desaparición forzada se cometieron dentro de un contexto de masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por los organismos de inteligencia de la dictadura cívico militar y por lo mismo, la responsabilidad del Estado debe determinarse de conformidad con los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran como normas de ius cogens y las normas generales del derecho internacional. La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en su artículo 27, dispone que “el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales” y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su



responsabilidad internacional (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas”, página 231). Toda víctima de una violación a los derechos humanos tiene el derecho a la reparación, el principal obligado a satisfacer este derecho es el Estado. Por tanto, la reparación es a la vez un derecho de las víctimas y un deber de los Estados. Adicionalmente, “cuando se determine que una persona natural o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima”. El derecho a la reparación y el deber correlativo del Estado de reparar han sido consagrados en los principales tratados internacionales de derechos humanos del sistema universal y de los sistemas regionales de protección, como asimismo en relevantes instrumentos de soft law. En el sistema universal, por ejemplo, de acuerdo con la interpretación del Comité de Derechos Humanos, el derecho a la reparación tiene fundamento en el derecho al recurso efectivo consagrado en el art. 2.3.a) del PIDCP5. Asimismo, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 16 de diciembre de 2005, la resolución 60/147 sobre los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. El sistema interamericano el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) señala: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. Interpretando esta disposición, la Corte IDH ha sostenido que “toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado”. Señaló también el Comité que [l]a reparación debe ser suficiente, efectiva y completa [, y que los Estados], al determinar las medidas de reparación y resarcimiento que se ofrezcan o concedan a las víctimas de la tortura, deben tener [...] en cuenta las características propias y las circunstancias de cada caso y que la reparación debe ajustarse a las necesidades particulares de la víctima y ser proporcional a la gravedad de las transgresiones cometidas contra ella. Toda víctima de una violación a un derecho humano es titular del derecho a la reparación integral. De acuerdo con este derecho, la reparación debe devolver a la víctima a la situación inmediatamente anterior a la violación de los derechos humanos que ha sufrido y en el evento de que no sea posible, se deberán reparar las consecuencias negativas ocasionadas por dicha violación. La CADH establece en su artículo 1º la obligación de los Estados parte, de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. La primera obligación de los Estados es respetar los derechos. La segunda obligación es la de garantizar. Esta obligación



implica el deber de organizar todo el aparato gubernamental de manera que sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La Corte IDH ha establecido que “como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”. (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 28 de julio de 1988, considerando 166). Por lo tanto, la obligación de garantizar incluye también el deber de reparar. La misma Corte ha señalado específicamente que “para garantizar plenamente los derechos reconocidos por la Convención, no es suficiente que el Gobierno emprenda una investigación y trate de sancionar a los culpables, sino que es necesario, además, que toda esta actividad del Gobierno culmine con la reparación a la parte lesionada” (Corte IDH, Caso Caballero Delgado, Sentencia de 8 de diciembre de 1995, considerando 58) La Corte IDH ha señalado que la indemnización por violaciones a los derechos humanos encuentra su fundamento en instrumentos internacionales de carácter universal y regional. Así lo ha entendido el Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y la Corte Europea de Derechos Humanos con base en el artículo 50 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. A juicio de la Corte IDH, es un principio de Derecho internacional que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que la indemnización constituye la forma más usual de hacerlo. (Corte IDH, Caso Godínez Cruz, sentencia de 21 de julio de 1989, “Reparaciones y Costas”, considerando 23). También en el Caso Godínez Cruz, la Corte señaló que “la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (*restitutio in integrum*), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”. En el ámbito de Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 60/147, con los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. Los Principios dividen los derechos de la víctima en tres categorías: el derecho a saber, el derecho a la justicia, y el derecho a obtener reparación. Respecto de la reparación de los daños sufridos, el Principio Nº 15 expresa que una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por fin promover la justicia y que la reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. El Principio Nº 16 establece que se debe dar a las víctimas de manera apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La indemnización se refiere al pago de una suma de dinero



destinada a compensar todo daño económicamente evaluable, ya sea material o moral, de una manera proporcional a la gravedad de la violación y las circunstancias del caso. El daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, así como los gastos efectuados con motivo de la violación y las consecuencias de carácter económico que tengan un nexo causal con ella. En cambio, el daño moral debe considerar “aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados, por ende, en términos monetarios. El mencionado daño moral puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y otras perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria”, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales”.

Siguen refiriendo que el Estado de Chile también es parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Agrega que las normas de derecho internacional que obligan al Estado a reparar en caso de personas desaparecidas han sido recogidas de manera constante por la jurisprudencia de la E. Corte Suprema, reproduciendo jurisprudencia al efecto.

Continúan argumentando acerca de la **procedencia de la indemnización del daño moral**, indicando que la responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse todo daño causado a un particular y, para una correcta interpretación de estas disposiciones que dejan un claro vacío las normas de derecho administrativo indicadas, es necesario acudir al derecho común. La indemnización comprende -según el artículo 2329 del Código Civil- todo daño, por lo que naturalmente está incluido el daño moral. La procedencia de la reparación del daño moral está reconocida en forma unánime por la doctrina y jurisprudencia nacional y a estas alturas resulta indiscutible, fluyendo de todo lo ya señalado que el Estado de Chile debe responder por el perjuicio que han ocasionado funcionarios del Ejército de Chile, puesto que se dan todos los supuestos necesarios para determinar el perjuicio moral sufrido por nuestra mandante.

Sobre la **conurrencia de los requisitos para indemnizar en el caso de autos** aseguran que en el caso ad litem se dan todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados: 1.- Existencia de daño moral producto de la desaparición forzada sufrida por el padre de nuestra mandante. 2.- La acción u omisión emanó de órganos del Estado, ya que agentes del Estado, militares, detuvieron e hicieron desaparecer a don Osvaldo Del Carmen Ramos Rivera. El hecho que causó daño fue ejecutado por el



Estado de Chile, puesto que fueron agentes de un órgano de su administración los que actuaron (agentes del Ejército de Chile) y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal, que además aseguró la impunidad durante todos estos años. 3.- Nexos causal. El daño a la víctima (demandante) emana, justamente, de la perpetración del delito civil. 4.- Por último, no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.

SEGUNDO.- Que, la demandada contestando la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos por doña Gabriela Fernanda Ramos Barraza, hija de don Osvaldo Del Carmen Ramos Rivera, quien se encuentra desaparecido luego de haber sido detenido por agentes del Estado, solicita el rechazo de dicha acción en base a las excepciones, defensas y alegaciones se indicaran y efectuando un repaso de los antecedentes de la demanda señala que se interpone demanda civil de indemnización de perjuicios por el daño moral causado por la detención y posterior desaparición de su padre don Osvaldo del Carmen Ramos Rivera, hechos ocurridos desde el 11 de septiembre de 1973 y solicita el pago de la suma total por la suma de \$300.000.000, más reajustes, e intereses desde la fecha de notificación de la demanda, con costas, invocándose como fundamento jurídico de su acción dirigida en contra del Fisco de Chile, diversas disposiciones de la Constitución Política de 1980; la ley 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, la Convención Americana de Derechos Humanos; y, general, las disposiciones del complejo normativo denominado “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, y una recopilación de fallos sobre la materia, todo lo cual configuraría a su entender, una responsabilidad extracontractual imprescriptible del Estado.

En primer lugar, opone la **excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada, por haber sido ya indemnizada y reparada integralmente la demandante**, refiriendo en cuanto al marco general sobre las reparaciones ya otorgadas que no resulta posible comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. Señala que, en efecto, el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a duda, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Ese concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o



reconciliación proponen como programas de reparación. Tales programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero³ y en ese sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones bastando para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra Ley 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella, no debiendo extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño. Luego se explaya sobre la complejidad reparatoria y sostiene que en cuanto a la idea reparatoria la Ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esa compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional y en ese sentido detalla que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas; mediante de esos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto del particular proceso de Justicia Transicional que no busca otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de esas compensaciones permitirá verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto. c) Reparación mediante transferencias directas de dinero. Diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones. La ley 19.123 ha sido, en este concepto, la más importante. Por otra parte, la referida Ley 19.980 incorporó al padre como beneficiario no sólo cuando la madre faltare, sino también cuando ella haya dejado o dejare de percibir la pensión por renuncia o fallecimiento e incrementó a un 40% el beneficio reparatorio para la madre o el padre de los hijos de filiación no matrimonial del causante. d) Reparación mediante la asignación de nuevos derechos. Se refiere a los derechos que la Ley 19.123 ha incorporado en el patrimonio de los familiares de las víctimas de DDHH.

Argumentando acerca de la identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas indica que de todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos, siendo así que, tanto la indemnización demandada como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos y de esa forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no



pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones. Reproduce jurisprudencia en ese sentido.

Hace presente que órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Se remite a lo expresado por dicha corte en el caso Almonacid y añade que, en ese mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades. Se expone respecto del contenido del documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos”.

Sostiene que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema y estando entonces las acciones alegadas en estos autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, y al tenor de documentos oficiales que indica se acompañaran es que opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la demandante, por el daño causado con el delito de homicidio de su padre, en conformidad a la Ley 19.123 y los restantes cuerpos legales y acciones de reparación citados.

Opone luego la **excepción de prescripción extintiva** de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita ésta, se rechace la demanda en todas sus partes, fundado en que según lo expuesto en la demanda, los hechos que dan origen a la demanda civil se produjeron a contar del 11 de septiembre de 1973, siendo del caso que aun entendiendo el tribunal suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 17 de diciembre de 2021, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil, por lo que en consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil.

En subsidio de lo antes expuesto y en caso que el tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habrían hecho exigibles los derechos a indemnización y la fecha de notificación de las acciones civiles que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Refiriéndose a **generalidades sobre la prescripción**, afirma que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en ese caso no existe y pretender que la responsabilidad del



Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras y efectivamente, las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*. Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales. La prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2.494, inciso 1º, del Código Civil). La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido. Toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

Indica como **fundamento de la prescripción** el de dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida, siendo por ello posible que la prescripción se produzca sin que el acreedor haya recibido lo que le corresponda y sin que haya tenido, con ello, intención de remitir la deuda de que se trate. Al acreedor tendrá que reprocharse una grave negligencia, pero, por encima de su interés personal, se impone la necesidad de fijar un término a las acciones. En la práctica, los pocos casos en que la prescripción produce resultados chocantes, ellos no pueden compararse con los infinitos casos en que viene a consolidar y a proteger situaciones regulares y perfectamente justas. La prescripción extintiva, un modo de extinción de las obligaciones -que al igual que en la usucapión cumple una función de adquisición y otro de prueba del derecho- es llamada con bastante propiedad por la doctrina como un modo de liberación de las obligaciones, o sea, algo más que su extinción. De esta manera, los planteamientos doctrinarios anteriores permiten concluir que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas, siendo por las mismas razones preciso consignar que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que



consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido, resultando inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales. Advierte por otro lado la inexistencia de conflicto entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil, lo que habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa, y en la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

Enseguida comenta sobre **jurisprudencia sobre la materia**, explayándose en particular sobre la sentencia del pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013, sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 *“Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno”*, relativa a demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, afirmando que, el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva; que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa **Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil**; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal; que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto; y que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde este momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de la persona desaparecida. También analiza otros fallos de la Excma. Corte Suprema en la materia en los que se ha reconocido expresamente el carácter prescriptible de las acciones indemnizatorias por hechos análogos al de autos.

Continúa explayándose sobre el **contenido patrimonial de la acción indemnizatoria** señalando que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de la misma, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial y sobre el particular debe considerarse, como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que



persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial, bastando en efecto considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de una acción ajena a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de la misma.

Bajo la denominación de **normas contenidas en el Derecho Internacional** y en relación con las alegaciones expuestas por los actores en cuanto que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, se remite a ciertos instrumentos internacionales que no contempla la imprescriptibilidad de la acción civil derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Sintetizando menciona que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada al ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado; razones por las cuales se deberá rechazar la demanda por encontrarse prescrita la acción civil deducida.

Siguiendo, indica que **en cuanto al daño e indemnización reclamada**, en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, opone las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y los montos pretendidos indicando en cuanto a la fijación de la indemnización por daño moral y con relación al daño moral que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente, produciendo a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria. La indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, origerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia



estas capacidades y en tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta claramente excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en este materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las excepciones opuestas de reparación integral y de prescripción, la regulación del daño moral debe considerar tanto los pagos ya recibidos del Estado por otros familiares, como las reparaciones satisfactivas y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales. En subsidio de las excepciones y alegaciones hechas valer precedentemente, alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el tribunal debe considerar todos los pagos a través de los años que ha recibido la demandante por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (Nº19.123 y Nº19.980) y también todos los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales y otros contemplan, y que benefician al demandante, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. Advierte que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces, haciendo presente a que para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia.

Finaliza refiriéndose a la **improcedencia del pago de reajustes e intereses** en la forma solicitada, haciendo presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada, a la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene el demandado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse. Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada. Por otra parte, el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, resulta absurdo pretender aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha que precede a la determinación del monto por sentencia ejecutoriada. Por consiguiente, en el hipotético caso de que se resolviera acoger las acciones de autos y se condene al demandado al pago de indemnizaciones de perjuicios, tales reajustes sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada.

Respecto de los intereses, indica que el artículo 1.551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia, por consiguiente, en el hipotético caso de que el tribunal decida acoger las acciones de autos y condene al pago de indemnizaciones de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia



condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y el demandado incurra en mora.

TERCERO.- Que, la demandante evacuando el trámite de **Réplica** reitera íntegramente la demanda, solicitando sea acogida con costas, adicionando las siguientes argumentaciones: respecto de la excepción de reparación integral reitera que el hecho de haber obtenido pensiones de reparación con arreglo a la Ley Nro. 19.123 por parte de algunos familiares, no es óbice para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un Tribunal de la República, resultando la pretensión del Fisco de Chile, de oponer excepción de pago, irreconciliable con la normativa internacional ya señalada en la demanda, porque el derecho común interno sólo es aplicable cuando no contradice el derecho internacional, en materias de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Agrega que, la preceptiva invocada por el Fisco -que sólo consagra un régimen de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es dable presumir que se diseñó para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos porque se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación citada, no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley.

Luego, refiriéndose a la excepción de prescripción opuesta por el demandado asegura que reiterada jurisprudencia de la E. Corte Suprema ha señalado que tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie- cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, comprendidos en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario, por consiguiente, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama, por lo que pretender aplicar las disposiciones del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, hoy resulta improcedente, revelando que, en la situación de hecho demandada, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXBHXHEQQNT

sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de él emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo del eventual ejercicio de la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado, encontrándose el fundamento a todo lo señalado en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5°, inciso segundo, y 6° de la Constitución Política de la República. Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una regla internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias del agravio, es decir, no resultan aplicables a estos efectos las reglas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios.

Estima luego totalmente ajustado a la justicia el monto demandado, ya que se trata del daño moral de la mayor entidad acreditando las consecuencias dañosas de los aciagos hechos narrados para la salud mental de la demandante.

En cuanto a los reajustes e intereses demandados considera estar conforme a derecho, puesto que un tribunal fija los montos en un momento determinado, pensando en el valor adquisitivo de esa fecha, razón por la cual tiene que considerar la desvalorización.

CUARTO.- Que, evacuando el trámite de **dúplica** el demandado Fisco de Chile, ratifica en su totalidad las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda de autos, las que da por expresamente reproducidas y conforme a ellas pide nuevamente el rechazo de la demanda. Reitera asimismo la alegación relativa a la excepción de reparación integral refiriéndose a la tesis de compatibilidad de la leyes de reparación, indicando que, toda vez que en otros casos similares los demandantes alegan, en cuanto a que la pensión de reparación otorgada por el Estado a las personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura conforme a la Ley 19.992 y demás leyes complementarias sería plenamente compatible con la indemnización que en autos se persigue, por no tener el carácter de reparación de daño moral, pues solo le atribuyen el carácter de una ley que otorgó pensiones asistenciales que no apuntaron a reparar el daño moral. Que, además sería una indemnización fijada unilateralmente y no por un órgano jurisdiccional, sosteniendo que ello no es así, por muchas razones, porque el Estado de Chile adoptó una política integral de reparación tanto en dinero, beneficios de salud, construcción de memoriales, etc. y por eso es integral y no sólo una denominación, como alega en su réplica. Por otra parte, tampoco puede ser considerada una indemnización fijada unilateralmente, pues desde el momento que el demandante aceptó esta pensión de reparación, aceptó el monto y las condiciones de esta reparación del daño



moral sufrido, de modo que ahora no puede desconocer sus efectos. La pensión otorgada por la ley 19.992 tuvo un claro fin reparatorio del daño moral, nunca tuvo el carácter de “pensión de sobrevivencia”, como la han llamado, como aquellas que se otorgan a quienes no han podido obtener una pensión con sus fondos. Se remite sobre ese punto al fallo dictado por la Excma. Corte Suprema

Luego, sobre la excepción de prescripción opuesta por su defensa la demandante sostiene que la acción deducida tiene el carácter de imprescriptible conforme con la doctrina y con la jurisprudencia internacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En relación a la prescripción de la acción deducida en este juicio, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013, en los autos rol 10.665-2011

“Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno”, cuyos principales argumentos transcribió en su oportunidad. En dicho fallo se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil. También destaca la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, con fecha 16 de marzo de 2016, donde, pronunciándose respecto a la excepción de pago y de prescripción.

QUINTO.- Que, recibida la causa a prueba la **demandante** aparejó por el primer otrosí de su libelo de folio 1 y presentaciones de folios 3, 20, 21 y 25, prueba **documental**, toda la cual se singulariza como:

- 1.- Certificado de nacimiento de doña Gabriela Fernanda Ramos Barraza, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Santiago con fecha 01 de agosto de 2021.
- 2.- Copia autorizada de escritura pública de fecha 21 de junio de 2021, otorgada ante notaria público don Félix Jara Cadot, titular de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, donde consta mandato judicial conferida por doña Gabriela Fernanda Ramos Barraza a doña Magdalena Garcés Fuentes y otros.
- 3.- Imagen digitalizada de Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen I, Tomo I, emanado de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en cuya página 118 figura el caso de don Osvaldo Del Carmen Ramos Rivera.
- 4.- Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia.
- 5.- Artículo titulado “Algunos Problemas de Salud Mental detectados por equipo psicológico – psiquiátrico” del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.
- 6.- Artículo titulado “Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad.
- 7.- Artículo titulado “Trabajo Social, Una Experiencia Solidaria en la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” del mes de Abril del año 1987, suscrito



por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.

8.- Artículo titulado “Salud Mental y Violaciones a los Derechos Humanos” del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.

9.- Informe sobre Evaluación Sicológica de Daños y Consecuencias Producidas por la Violencia de Estado de doña Gabriela Fernanda Ramos Barraza emitido por el PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente de fecha 13 de Abril de 2022.

SEXTO.- Que, por su parte el **demandado** Fisco de Chile acompañó por el primer otrosí de su escrito de folio 7, prueba **documental** que corresponde a:

1.- Resolución TRA 45/142/2017 de fecha 28 de agosto de 2017, publicada en el Diario Oficial con fecha 9 de septiembre de 2017 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del DFL N°1 de Hacienda del año 1993, sobre nombramiento de doña Ernestina Ruth Israel López, como Abogada Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado para representar al Fisco de Chile.

SEPTIMO.- Que, de igual modo el demandado Fisco de Chile, solicitó y obtuvo respuesta del Instituto de Previsión Social, que rolan a folios 12 y 13, remitiendo Ord. 4792-5120 y 4792-5132, de fechas 19 y 20 de enero de 2022, respectivamente, emitido por el Jefe de Departamento Secretaria General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, por el que sobre beneficios reparatorios detalla la pensión de reparación Ley 19.980, obtenido por la demandante doña Gabriela Ramos Barraza, en su calidad de hija del causante Ley Rettig don Osvaldo Del Carmen Ramos Rivera.

OCTAVO.- Que, del mérito de autos, documentos individualizados en el motivo Quinto del presente fallo, particularmente a lo consignado en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen I, Tomo I, emanado de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y todo dentro del contexto político de público conocimiento acontecido a partir del 11 de septiembre de 1973, con el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente don Salvador Allende Gossens, tomando el poder un régimen *de facto* que se extendería por casi 17 años, caracterizado por una situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, violencia política, jurídica y social de la que fueron víctimas cientos de miles de personas, se encuentra acreditado que, “efectivamente doña **Gabriela Fernanda Ramos Barraza**, nacida el 06 de agosto de 1973, hija de doña Mercedes Del Carmen Barraza Contreras y de don Osvaldo Del Carmen Ramos Rivera, -éste de 22 años de edad a la época de ocurridos los hechos, mueblista, militante del Partido Socialista, colaborador cercano del Presidente Allende, perteneciente al dispositivo de seguridad del Presidente, conocida como GAP (Grupo de Amigos del Presidente)-, para el 11 de septiembre de 1973, contaba tan solo con 15 días de vida. Ese día en horas de la mañana y en circunstancias que el Palacio de La Moneda fue intervenido militarmente por efectivos de Infantería, de tanques del Ejército de Chile y de Carabineros de



Chile, su padre es detenido y lesionado con múltiples heridas a bala, entre estas, herida a bala tóraco-abdominal complicada, herida vesícula biliar hígado y colon, propinadas por agentes militares y trasladado a dependencias de la Posta Central de la Asistencia Pública donde permaneció hasta el día 28 de septiembre de ese año, fecha en que es firmada el alta del paciente por el Dr. Pedro Gaete Verdugo y es sacado de ese centro asistencial por efectivos militares, quienes habrían señalado que sería trasladado a la Penitenciaría de Santiago, recinto donde no se encontró anotaciones de su ingreso o egreso y data desde la cual se pierde toda noticia acerca de su paradero y destino, permaneciendo en calidad de desaparecido hasta la fecha pese a las diversas averiguaciones y gestiones administrativas y judiciales realizadas por la demandante. A raíz de esos sucesos, doña Gabriela Fernanda Ramos Barraza, ha sufrido grandes angustias y calvarios secuela de la desaparición forzada de su padre y por la incertidumbre permanente acerca de lo que le ocurrió, lo que han afectado directamente su salud física, psicológica y emocional de manera integral e irreparable, y que han ocasionado una desestructuración en los diversos ámbitos de su vida, secuelas que han permanecido en el tiempo y que han derivado en una interrupción y alteración de la vida, permanente depresión, angustia y temores y consecuente inestabilidad social y laboral y dificultades para el desarrollo de una vida plena”.

NOVENO.- Que, así las cosas, del mérito de autos, es posible establecer que estos mismos hechos descritos en los párrafos precedentes son los que sustentan la acción de indemnización de perjuicios que deduce el demandante doña Gabriela Fernanda Ramos Barraza en contra del Fisco de Chile, a raíz de los daños y perjuicios sufridos en la calidad de hija de don Osvaldo Del Carmen Ramos Rivera por su repentina, forzada e injustificada desaparición por agentes del Estado, hechos que caben dentro de la calificación de crimen de lesa humanidad y que constituyen, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre derechos humanos.

DECIMO.- Que, el señalado informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, como a su turno la Ley N° 19.123, en cuanto crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación estableciendo que como servicio descentralizado le corresponderá promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18, remitiéndose luego al artículo 17, norma que se remite a la individualización de las personas que se realiza en el en el volumen segundo del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se desprende con claridad que el Estado reconoció la calidad de víctima de violación a los Derechos Humanos o de violencia política a don Osvaldo Del Carmen Ramos Rivera, según da cuenta la copia del informe individualizado en el motivo Quinto.

UNDECIMO.- Que, de lo reseñado en los motivos precedentes ha quedado establecida la responsabilidad del Estado en el caso en análisis, resultando necesario consignar que en estos autos el actor ha accionado de indemnización de perjuicios pretendiendo obtener el resarcimiento de los daños morales sufridos y ocasionados por y a consecuencia del actuar de agentes del Estado en la detención y secuestro de don Osvaldo Del Carmen Ramos Rivera, cuya desaparición perdura hasta el día de hoy.



DUODECIMO.- Que, solicitando el rechazo de la demanda deducida de contrario el Fisco de Chile ha interpuesto la excepción de improcedencia de la indemnización por haber sido preterido legalmente el demandante, fundado en que la actora ya ha sido indemnizado en conformidad a la Ley 19.123, en los términos analizados en el motivo Segundo del presente fallo.

DECIMO TERCERO.- Que, atendida la naturaleza de la reparación integral establecida en la Ley 19.123 y sus modificaciones, otorgada en forma voluntaria por el Estado de Chile en el marco de cumplimiento de tratados internacionales ratificados por Chile, y que en ella misma establece que los beneficios por ella otorgados no son incompatibles con otras reparaciones, siempre reconociendo el principio de reparación integral que sostiene el ordenamiento regulatorio internacional de los Derechos Humanos, no resulta suficiente en modo alguno para fundamentar una excepción en los términos como lo ha hecho la demandada. Así, es necesario precisar que la normativa invocada por el Estado, que solo establece pensiones y bonos asistenciales, no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que en esta causa se persigue, (artículo 24) sin que ella haya sido otorgada para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los Derechos Humanos, tratándose de distintas formas de reparación, no importando en caso alguno la renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare la procedencia de una indemnización total por daño moral, por los medios que autoriza el ordenamiento jurídico. Que, por lo demás, a juicio de esta sentenciadora, y a mayor abundamiento específicamente en el caso de autos, en cuanto la demandante doña Gabriela Fernanda Ramos Barraza, en su calidad de hija de la víctima don Osvaldo Del Carmen Ramos Rivera, no son ni han sido beneficiarios de una pensión mensual de reparación conforme a la Ley 19.123, -principal beneficio concedido a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, cuyo establecimiento tuvo el propósito de “desagravio, satisfacción completa de la ofensa, daño o injuria”, sí resulta procedente que sea resarcido del evidente daño moral que en diversas dimensiones ha padecido y encontrándose acreditado en autos la perpetración de la detención y desaparición forzada en la persona de don Osvaldo Del Carmen Ramos Rivera, así como la participación en el mismo de agentes del Estado en sus calidades de Garantes de la seguridad pública, dependiente del Estado de Chile, existe por ende el daño moral comentado, el cual como se dijo, no solo debe ser reparado por los otros beneficios sociales contemplados en la Ley 19.123, sino que, también debe ser reparado y regulado prudencialmente de acuerdo a los criterios imperantes en nuestro ordenamiento jurídico y el principio de equidad. Así, acorde con lo razonado anteriormente, resulta procedente rechazar la excepción opuesta por el Fisco de Chile.

DECIMO CUARTO.- Que, en segundo término, el Fisco de Chile ha deducido la excepción de prescripción extintiva de la acción intentada, ello conforme lo establecido en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación a lo dispuesto en el artículo 2.497, en los términos latamente expuestos en el motivo Segundo de esta sentencia, sosteniendo que desde el 11 de septiembre de 1973, y aun entendiendo suspendido el plazo de prescripción hasta la



restitución de la democracia, el 11 de Marzo de 1990, a la fecha de notificación de la demanda, 17 de diciembre de 2021, ha transcurrido en exceso el plazo que establece el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, opone la prescripción extintiva de cinco años contemplado para las acciones y derechos por el artículo 2.515, en relación al artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la fecha de notificación de la demanda ya referida, transcurrió con creces el plazo establecido en el artículo 2.515.

DECIMO QUINTO.- Que, a efectos del debido análisis de la excepción en comento, es necesario tener presente que el fundamento jurídico de la acción deducida en autos lo sitúa la actora en la responsabilidad del Estado por el daño moral en el Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, en razón del hecho propio del Estado al haber actuado como órgano, cometiendo un ilícito a través de sus agentes, estableciendo como autores del mismo a miembros del Ejército de Chile en servicio al momento de los hechos y que como se señalare en los motivos precedentes, estos mismos hechos que sustentan la acción de indemnización de perjuicios que deduce el demandante en contra del Fisco de Chile, caben dentro de la calificación de crimen de lesa humanidad y que constituyen, por ende una violación grave a las normas internacionales sobre derechos humanos, y que, a través de los elementos probatorios ya ponderados, permiten desprender con claridad que el Estado reconoció la calidad de víctima de violación a los Derechos Humanos o de violencia política a don Osvaldo Del Carmen Ramos Rivera. En consecuencia, se demuestra que se está en presencia de un afectado por un delito de lesa humanidad, de manera que el derecho de las víctimas de este tipo de ilícitos encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y normativa de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en nuestra carta fundamental, en la especie inciso 2° de los artículos 5 y 6 de la Constitución Política de la República.

DECIMO SEXTO.- Que, asentado así lo anterior, corresponde continuar analizando la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile, haciendo presente que tratándose de delitos de lesa humanidad, su acción persecutoria es imprescriptible, más aun si tratándose en la especie de una demanda de indemnización por daño moral sustentada fehacientemente en la comisión por parte de agentes del Estado de un delito de secuestro calificado, que tanto, para la doctrina, como, para la jurisprudencia se trata de un delito permanente, es decir, de un estado delictuoso que se prolonga en el ámbito temporal mientras subsista la lesión del bien jurídico afectado, por lo que necesariamente se deberá desestimar la excepción de prescripción puesta por la demandada. Que, de este modo, dada la especial naturaleza de los ilícitos cometidos, lo que surge de los hechos de que da cuenta la causa penal, no controvertidos por el demandado, aparece que ellos, que son el fundamento de la demanda, constituyen un crimen de lesa humanidad y, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre Derechos Humanos, por lo que resulta improcedente declarar la prescripción de la acción indemnizatoria ejercida, como se dirá.



DECIMO SEPTIMO.- Que, en efecto, en la clase de delito por el cual se sustenta la acción indemnizatoria reclamada, y en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no es coherente entender que la acción civil que de ellos deriva esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Que, a mayor abundamiento, es necesario tener asimismo presente que, pesando sobre el Estado el deber de reparar a la víctima, este deber encuentra también su consagración en el derecho interno en el sistema de responsabilidad del Estado que deriva además del artículo 3 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto dispone que la administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetarse es el de la responsabilidad, lo que recoge expresamente en su artículo 4. Por consiguiente, cualquier diferenciación entre ambas acciones, y otorgarles un tratamiento desigual es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

DECIMO OCTAVO.- Que, sin perjuicio de lo ya expresado, corresponde señalar que los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, de modo que estas no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, toda vez que, si se verifica un hecho ilegítimo imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esa índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. En el mismo sentido la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones. En este sentido autores como Humberto Nogueira Alcalá, "Las Constituciones Latinoamericanas" en Anuario de derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000 ha señalado que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del mismo.

DECIMO NOVENO. - Que, en consecuencia, solo corresponde como se señaló, desestimar la excepción de prescripción opuesta por el demandado de autos, tanto la excepción formulada por vía principal como aquella formulada por vía subsidiaria.



VIGESIMO.- Que, encontrándose establecida la comisión de un hecho ilícito por agentes del Estado, de la cual surge la responsabilidad del Estado conforme a lo establecido en el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental en cuanto prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la constitución y a las leyes, y son responsables de sus actos de acuerdo a la ley, como asimismo a lo establecido en el artículo 4 de la ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado al disponer que *“El Estado será responsable de los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que las hubiere realizado”*. Cabe señalar que el citado principio se ve reiterado en el artículo 44 del mismo texto legal. Al efecto, de las normas citadas en el párrafo precedente, solo es dable concluir que tanto el constituyente como el legislador ha expresado en forma inequívoca su intención de que el Estado se haga responsable del actuar de sus agentes, cuando este ocasiona un daño al administrado, responsabilidad que por su naturaleza cae en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.

VIGESIMO PRIMERO.- Que, necesario resulta a continuación, el análisis del daño cuyo resarcimiento se pretende por el actor, en cuanto presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios que se intenta en esta causa. Al efecto es necesario precisar que se trata en la especie del resarcimiento del daño moral, que requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, recordando que el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física, y/o en los sentimientos o afectos de una persona. El daño moral, es en consecuencia, toda lesión causada culpable o dolosamente que signifique molestias, perturbación en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona e imputable a otra, daño que no es de naturaleza propiamente económica y que no implica, un deterioro o menoscabo real y directo en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa, sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva.

VIGESIMO SEGUNDO.- Que, atendidas las particularidades reseñadas en el motivo precedente, es dable desprender que la comprobación de la inobservancia o agravio del derecho subjetivo envuelve al mismo tiempo, la prueba de la efectividad del daño moral, de suerte que comprobada la existencia de un delito, como es el caso de autos, forzoso es concluir que se ha producido un daño y que debe ser reparado, toda vez que no podría ser de otra manera, en tanto, materialmente resulta extremadamente difícil, medir con exactitud la intensidad con que las lesiones han afectado a la víctimas, en este caso el actor, por la naturaleza del perjuicio provocado. Por ello, la naturaleza del dolor no hace indispensable la prueba del mismo, sino que se trata de un hecho evidente que las lesiones físicas y mentales sentidas, experimentadas por el sujeto causan un sufrimiento, que no requiere de evidencia, pero que en todo caso debe ser indemnizado por quien los ocasionó, tomando en cuenta



todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse una apreciación equitativa y razonable por el tribunal.

VIGESIMO TERCERO.- Que, en el caso de autos, en relación al daño sufrido por la actora, en su calidad de hija de don Osvaldo Del Carmen Ramos Rivera, quien a la fecha de la detención y desaparición forzada de su padre contaba con apenas días de vida, y éste desapareció sin que su familia tuviera conocimiento de lo sucedido, con la consiguiente desprotección, desamparo, estigmatización social por esa ausencia, es dable presumir que le produjo un gran dolor, angustia, aflicción, inseguridad y natural temor al momento de producirse los hechos y que innegablemente se ha prolongado a lo largo de sus vida, recordando que la desaparición se prolonga por años hasta hoy, dejando una marca indeleble en su desarrollo posterior, al romperse su núcleo social básico, su familia, constituida por padres y hermanos, con la desaparición de su padre e incertidumbre total acerca de su destino, conclusión que se ve inequívocamente corroborada y que se infiere necesariamente por el informe psicológicas que se da cuenta en el motivo Quinto, que da cuenta de los padecimientos sufridos, las alteraciones de carácter, de salud, temores y angustias permanentes sufridos por la demandante durante años, y constatado por profesionales de la salud, que se han prolongaron desde su nacimiento y que tuvo consecuencias graves en la salud de la demandante que sirven de sustento a la presente demanda, y por los años siguientes en que se ha prolongado la búsqueda inagotable de su padre desaparecido hasta el día de hoy, circunstancias que en los informes emitidos acerca de las secuelas de los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, revelan los daños experimentados a lo largo de los años por la demandante a consecuencia del ilícito que motiva la presente causa. Cabe destacar que, por la naturaleza de la desaparición del padre, las circunstancias de la misma, los acontecimientos sociales históricos de nuestro país que han permitido en algunas casos, más de cuarenta años después, conocer algunas circunstancias de las desapariciones y la ubicación de los restos mortales de algunas de las víctimas, permiten desprender en forma inequívoca la angustia permanente, constante que en mayor o menor medida, le ha acompañado durante el devenir de toda su vida.

VIGESIMO CUARTO.- Que, encontrándose acreditado que la actora sufrió una lesión o detrimento en su persona, en el desarrollo de la misma, lo que es dable presumir desde las máximas de experiencia, y la naturaleza de los hechos acreditados en autos, le afectó su integridad psicológica, física, su libertad, sus afectos, estabilidad y unidad familiar, esto es, en general, los atributos o cualidades morales de su persona, con las consiguientes repercusiones en la normalidad de su existencia, necesario resulta acceder a la demanda de indemnización del daño moral experimentado por la actora, el que atendido los antecedentes que obran en el proceso y que han sido reseñados en los motivos anteriores, se accederá a la demanda de autos, teniendo presente los criterios de coherencia en la interpretación de los antecedentes, fijando a título de indemnización de perjuicios por el daño alegado prudencialmente la suma única y total de \$70.000.000.- (setenta millones de pesos) para la actora doña Gabriela Fernanda Ramos Barraza.



VIGESIMO QUINTO.- Que, debiendo pagar la demandada la suma de dinero ordenada pagar en el motivo precedente, ello deberá efectuarse debidamente reajustadas de acuerdo a la variación que experimente Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de la presente sentencia y aquella en que efectivamente se realice el pago, más intereses corrientes para operaciones reajustables, según liquidación que se practicará en su oportunidad.

Y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1698, y siguientes del Código Civil; 144, 159, 254 y siguientes, 342, 346 N° 3, 384, 430, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Ley 19.123; artículo 5 y 6 de la Constitución Política de la República, se declara:

I.- Que, se rechazan las excepciones opuestas por el Fisco de Chile, de reparación integral por haber sido ya indemnizado el demandante y de prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de perjuicios, ésta última, en ambas excepciones opuestas, de acuerdo a lo consignado en los motivos Décimo Tercero, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno, respectivamente.

II.- Que se acoge, con costas, la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta a folio 1, en cuanto la demandada deberá pagar a la demandante doña Gabriela Fernanda Ramos Barraza, la suma única de \$70.000.000.- (setenta millones de pesos); por concepto de daño moral, con reajustes e intereses en la forma indicada en el motivo Vigésimo Quinto.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por doña Jacqueline Dunlop Echavarría, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, trece de Septiembre de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: HXBHXHEQQNT